

EL MERCURIO
NACIONAL / Sábado

C

SANTIAGO DE CHILE, SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2026

nacional@mercurio.cl

IVÁN MARTÍNIC Y FERNANDA AROS

Valdivia es una de las ciudades donde más llueve en Chile, pero el cielo lucía despejado en la mañana de ayer, cuando el rector de la Universidad Austral, Egon Montecinos, llegó a la fiscalía local. A sus 52 años, el doctor en Ciencias Sociales vive la mayor tormenta de su vida profesional, cuestionado transversalmente por cómo maneja la protesta estudiantil que el miércoles terminó en una violenta agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincoao.

Aparentemente sereno en medio de este particular temporal —que también incluye críticas por los efluvios con que demostó al Partido Republicano en 2021, cuando aún no era rector—, Montecinos ingresó a las oficinas de avenida Francia para declarar sobre el incidente que ha conmocionado al país.

“Hay una investigación en curso. Estamos colaborando”, comentó mientras entraba a la fiscalía con una mochila negra.

■ **Amenaza explícita: “Mataré a todos”**
 Poco después, la UACH suspendió todas las clases y actividades en el campus Isla Teja —escenario 48 horas antes del ataque a Lincoao— debido al hallazgo de mensajes con amenazas de tiroteo, incluyendo advertencias como “mataré a todos”.

La medida comenzó a regir a las 13:00 horas, para “resguardar la integridad de las y los estudiantes y de la comunidad universitaria”, se lee en la resolución número 073/2026, firmada por la vicerrectora académica, Alejandra Zúñiga.

Aunque se trata de una universidad pública no estatal, la decisión no fue bien evaluada en el Poder Ejecutivo.

En lo que repre-

Nuevas repercusiones de la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincoao:

U. Austral suspende clases por amenazas y Gobierno emplaza a los planteles a no ceder ante la violencia

La subsecretaria de Educación Superior llamó a rectores y docentes a que “ejercen la autoridad que sus cargos les confieren”, pues “una minoría” no puede impedirlo.

senta el pronunciamiento más categórico del Gobierno desde la agresión a la titular de Ciencia, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, advirtió

que “las clases, la investigación y todo el quehacer académico propio de una institución de educación superior no se pueden detener por amenazas ni hechos de violencia”.

Según argumentó, en las últimas dos décadas el Estado ha promovido y facilitado el acceso a la educación superior, que hoy cuenta con más de 1,3 millones de estudiantes. “Una minoría no está facultada para impedir este propósito”, aseguró.

Valdés hizo un “fuerte llamado” a los planteles a que “cuiden sus espacios educativos”, al tiempo que pidió a rectores y docentes que “ejercen la autoridad que sus cargos les confieren”, que es “custodiar el proceso formativo de los jóvenes de Chile”.

El ataque a Lincoao —que Valdés calificó como una “brutal agresión y privación de libertad”— tiene a la UACH no solo bajo una investigación del Ministerio Público. En lo administrativo, la Superintendencia de Educación Superior ofició al plantel para pedir los antecedentes y los protocolos aplicados. Y ayer por la tarde citó a declarar al propio rector.

“Yo tenía miedo de que tiraran una bomba”, reconoció ayer la ministra de Ciencia en una entrevista en TVN. Lincoao pidió “todas las consecuencias” que la ley contemple para los responsables, ya sea cárcel o expulsión de la UACH.

■ **La “ventana imitativa” que se cumplió**
 Valdivia es otro pedáneo en la escalada de tensión que vive la educación chilena desde que un alumno asesiñara a una respectora en Calama, el 27 de marzo.

Amenazas de atentados, ingresos de extraños y peleos entre estudiantes han obligado a activar protocolos de emergencia y, en varios casos, a interrumpir clases. La organización Escuelas Abiertas estimó que en los nueve días posteriores al crimen de Calama al menos 26 establecimientos lo hicieron.

Así ocurrió ayer en el North American College de Arica, mientras el sospechoso de anunciar un tiroteo en el CFT de Linares fue formalizado por amenazas y dejado con arraigo nacional.

Paulina Guzmán, directora del Laboratorio de Investigación e Innovación Docente de la U. San Sebastián, había advertido el 31 de marzo en este diario

que tras un evento como el de Calama “se abre una ventana de riesgo de entre 10 y 14 días, donde aumentan las amenazas, las conductas imitativas o las señales de alerta”.

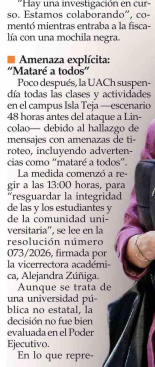
Ayer, añadió que si bien esta ventana tiende a disminuir con el tiempo, el riesgo no desaparece: “Puede bajar la intensidad, pero el sistema queda más sensible, especialmente en comunidades que ya tenían factores de riesgo previos”.

En respuesta, La Moneda presentó un proyecto de ley contra la violencia escolar que facilita a los colegios a revisar las mochilas.

Para Anne Traub, directora ejecutiva de Familias Primero, la iniciativa es necesaria, pero insuficiente si va sola: “Revisar mochilas no cambia lo que un niño vio en su casa el fin de semana. El colegio no generó esta violencia: solo fue el lugar donde la contuvimos hasta que ya no pudo más”.

Las medidas punitivas, dice, “cortan la hemorragia, pero necesitamos también políticas serias de fortalecimiento familiar y salud mental temprana (...). Si queremos escuelas seguras, necesitamos casas más seguras”.

La ministra de Salud, May Chomali, dijo que trabajan de manera intersectorial en programas de prevención y detección temprana, aunque reconoce brechas. “Nos faltan especialistas, por lo que estamos evaluando alternativas como telemedicina y el fortalecimiento de equipos de apoyo”, concluye.






Misión Educar

¡Vuelve a la sala de clases con Misión Educar!

Acompaña a **Ramón Ulloa** a conocer iniciativas que están mejorando la educación, transformando la vida de miles de estudiantes y profesores.

GRAN ESTRENO DEL PRIMER CAPÍTULO

Domingo 12 de abril 17:00 horas

TRANSMITE **13c**